

LEGITIMIDAD



Serie Gobernabilidad 1

INTRODUCCIÓN

Se entiende por Legitimidad al atributo gubernamental de lograr apoyo y consenso asegurando la obediencia en torno a su desempeño, por parte de aquellos actores en la escena política que tienen condiciones de incidir en la toma de decisiones, tales como Empresarios, Confederaciones Sindicales, Fuerzas Armadas, Policía, Iglesia, Minorías Activas, Congreso y Gobernadores, Alcaldes, etc.

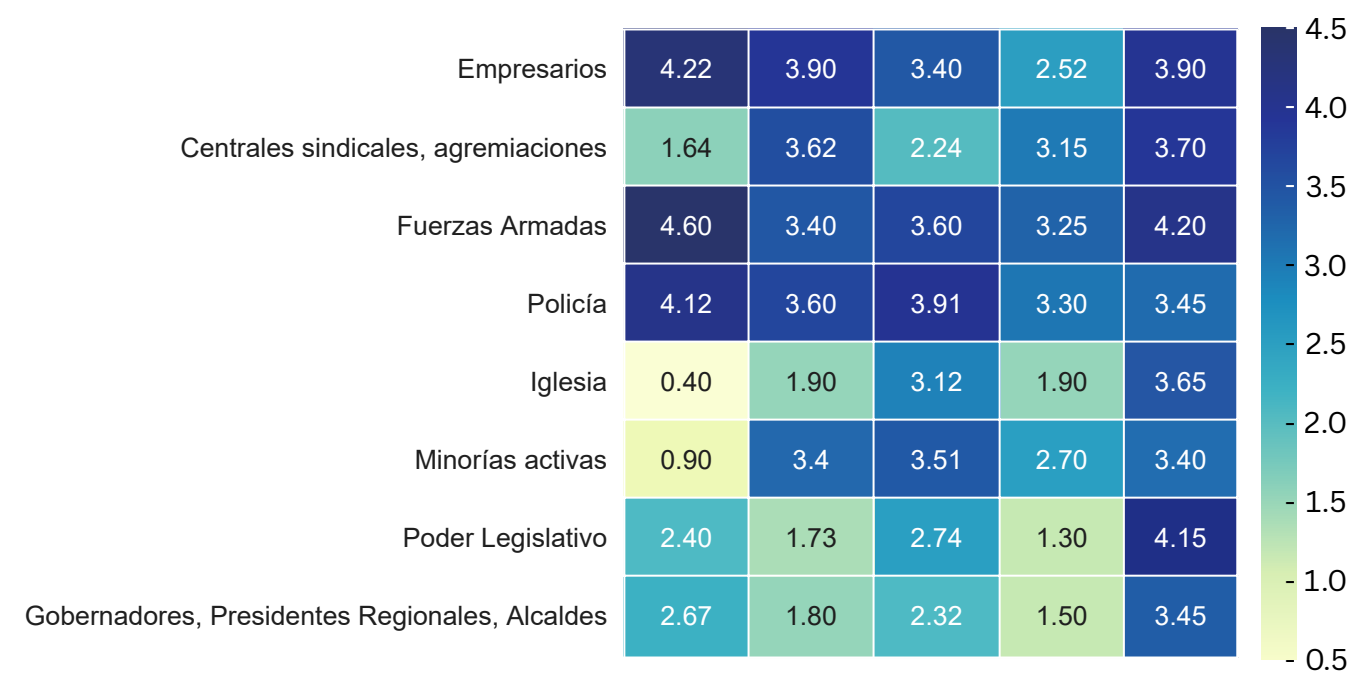
IMPORTANCIA PARA EMPRESAS ITALIANAS

- Un gobierno con alta legitimidad es menos vulnerable a protestas, rupturas internas o desobediencia institucional que podrían afectar proyectos en curso.
- Gobiernos legítimos tienen más autoridad para hacer cumplir contratos y menos incentivos a romper acuerdos de inversión o intervenir en tarifas.
- Operar en países donde el gobierno no tiene legitimidad puede asociar a la empresa con actores percibidos como ilegítimos, afectando su imagen pública.
- En situaciones de emergencia (apagones, desastres climáticos, escándalos), un gobierno legítimo tiene más margen para coordinar respuestas y contener el malestar social.
- Gobiernos legítimos son más capaces de implementar reformas de forma ordenada, lo cual es clave para planificar inversiones a mediano y largo plazo.
- Un gobierno sin legitimidad enfrenta más protestas, que pueden interrumpir obras, generar sabotajes, cortes o politización del servicio eléctrico.

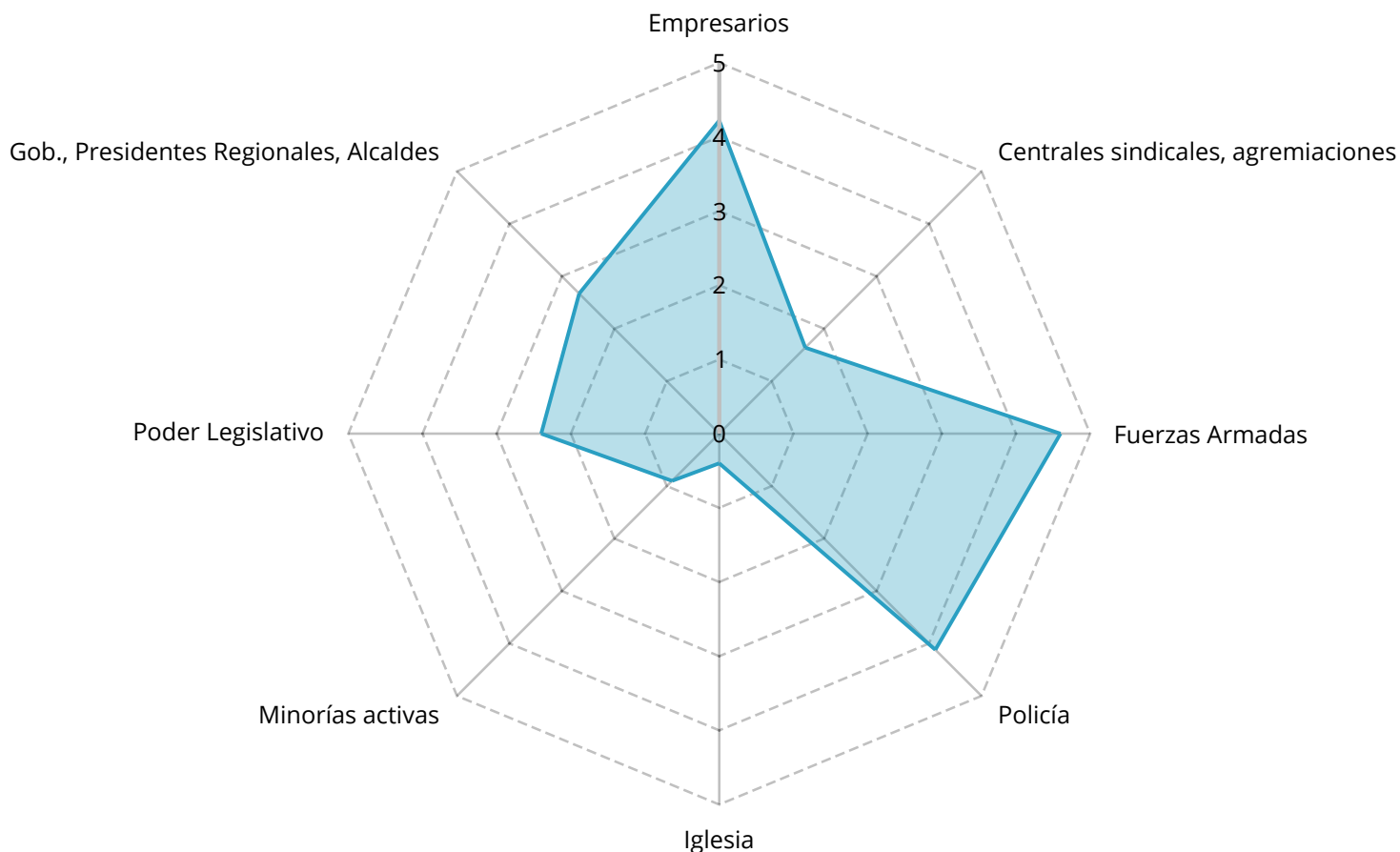
MAPA DE CALOR

Este Mapa de Calor permite visualizar de forma rápida y comparativa qué actores sociales e institucionales otorgan mayor legitimidad a los gobiernos de los cinco países latinoamericanos que analizamos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México). Con un simple golpe de vista, el color más intenso indica mayor respaldo, mientras que los tonos más claros evidencian debilidad o distancia. Esta herramienta facilita identificar los puntos de apoyo y vulnerabilidad en la arquitectura política de cada país, clave para el análisis de gobernabilidad y toma de decisiones estratégicas.

Mapa de calor: legitimidad por Actor e Influencia en 5 Países (Enero 2025)



Niveles de legitimidad por Actor - Argentina



EMPRESARIOS

Hasta diciembre de 2025, el gobierno de Javier Milei cuenta con un apoyo mayoritario del empresariado argentino, especialmente en lo relativo a la estabilización macroeconómica, la baja de la inflación y la orientación pro-mercado. Sin embargo, dicho respaldo es esencialmente pragmático y condicionado: convive con la preocupación por la rentabilidad, el impacto del ajuste en la actividad y la velocidad de recuperación. La legitimidad empresarial es real, pero depende de que el programa económico logre traducirse en crecimiento sostenido a partir de 2026. Calificación de apoyo 4.22/5, difiere del 4.40 de abril de 2025 porque entonces había respaldo fuerte con expectativa de shock positivo, hoy es un respaldo alto pero más condicionado

CENTRALES SINDICALES, AGREMIACIONES

El gobierno de Javier Milei carece de legitimidad ante las centrales sindicales, que operan como un actor opositor cohesionado y movilizado. La confrontación es estructural, ideológica y programática, especialmente en materia laboral, lo que convierte al sindicalismo en uno de los principales focos de conflictividad social durante 2025. Calificación en abril 2025 era de 1,97, lo que implicaba una oposición dura, aún fragmentada. Para diciembre de 2025 desciende a 1,64 que implica una oposición cohesionada, activa y callejera.

FUERZAS ARMADAS

Durante el segundo semestre de 2025 se consolidó el alineamiento político-institucional entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Los cambios en la cúpula militar, la designación de un oficial proveniente de la institución al frente del Ministerio de Defensa y la reafirmación pública del rol estratégico de la defensa por parte del presidente reforzaron la cohesión y el respaldo interno al gobierno. La variación al alza respecto de abril (4.5 a 4.6) responde a esta mayor certidumbre en la cadena de mando y al fortalecimiento del vínculo simbólico y funcional, aun cuando persisten costos reputacionales y tensiones con actores civiles y de derechos humanos.

POLICÍA

Durante el segundo semestre de 2025 se registró un fortalecimiento moderado del respaldo policial al gobierno, asociado a la reforma estructural de la Policía Federal Argentina, la redefinición de su misión hacia el combate del delito federal complejo y la creación del Departamento Federal de Investigaciones, que otorgaron mayor claridad estratégica y jerarquización institucional. El ajuste de la calificación de 3.97 en abril a 4.12 en diciembre refleja este mayor alineamiento político-funcional y el respaldo simbólico explícito del Poder Ejecutivo, aunque el impacto pleno de las reformas aún depende de su implementación operativa y de mejoras materiales que consoliden el apoyo en el mediano plazo.

IGLESIA

Durante el segundo semestre de 2025 se profundizó el distanciamiento entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia Católica, evidenciado por la ausencia de diálogo institucional, la falta de recepción presidencial a la Conferencia Episcopal por segundo año consecutivo y la inexistencia de un canal formal de interlocución tras la vacancia en la Secretaría de Culto. La corrección a la baja de la calificación (de 0.5 en abril a 0.4 en diciembre) responde a la consolidación de una relación fría y políticamente marginal, agravada por el acercamiento selectivo del gobierno a otros actores religiosos no críticos del modelo económico.

MINORIAS ACTIVAS

Las minorías activas (actores con alta capacidad de reclutamiento, bloqueo o deslegitimación) mantienen una relación abiertamente conflictiva con el gobierno, encabezando protestas contra el ajuste y la reforma laboral, con capacidad sostenida de movilización callejera y rechazo ideológico al programa libertario. La leve corrección a la baja respecto de abril (de 0.95 a 0.9) refleja la consolidación de un antagonismo estructural y la recurrencia de la conflictividad, contenida hasta ahora por la aplicación del protocolo antipiquetes y el control del orden público.

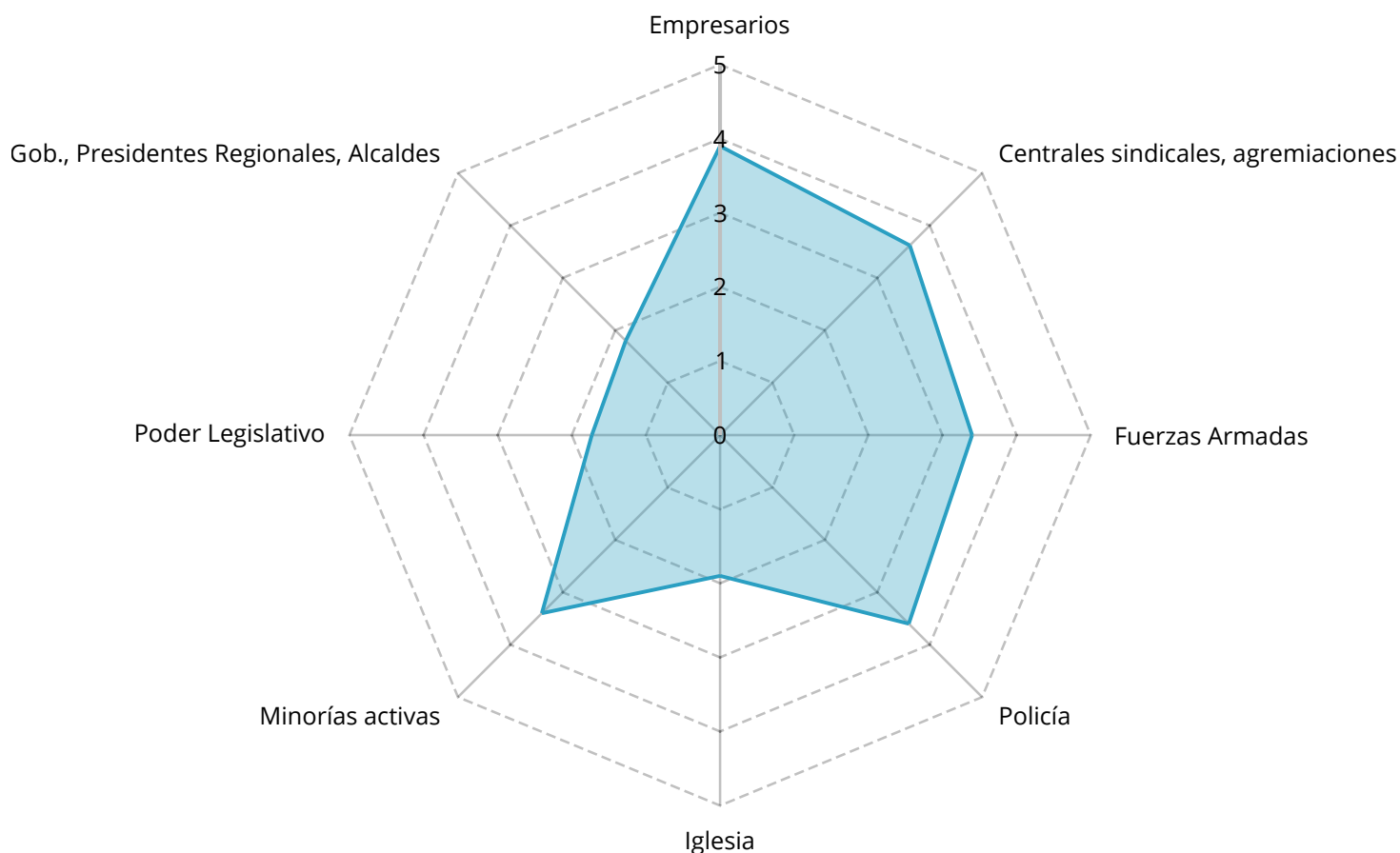
PODER LEGISLATIVO

Tras las elecciones legislativas de octubre de 2025, el respaldo del Congreso al Poder Ejecutivo mostró una mejora relativa, producto del fortalecimiento del bloque oficialista y sus aliados, que permitió al gobierno asegurar el tercio necesario para blindar el veto presidencial y mejorar su capacidad de negociación. La actualización de la calificación (de 2.10 en abril a 2.40 en diciembre) refleja este cambio estructural, aunque el vínculo sigue siendo condicional y táctico, con un Congreso fragmentado que impone costos políticos elevados para avanzar en reformas sensibles.

GOBERNADORES, PRESIDENTES REGIONALES, ALCALDES

Durante el segundo semestre de 2025 se observó una mejora relativa en la relación entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos subnacionales, marcada por un mayor pragmatismo y la consolidación de acuerdos transaccionales orientados a garantizar gobernabilidad legislativa y habilitar proyectos estratégicos, especialmente en provincias mineras. La actualización de la calificación (de 2.47 en abril a 2.67 en diciembre) refleja este aumento de la cooperación funcional, aunque el vínculo continúa siendo fragmentado, inestable y condicionado por tensiones fiscales, diferencias políticas y negociaciones sectoriales de corto plazo.

Niveles de legitimidad por Actor - Brasil



EMPRESARIOS

Durante el segundo semestre de 2025 se observó un fortalecimiento del respaldo pragmático del empresariado al gobierno de Lula, particularmente en el plano internacional, donde grandes compañías actuaron como puente para descomprimir tensiones con Estados Unidos y garantizar previsibilidad comercial. La actualización de la calificación (de 3.71 en abril a 3.90 en diciembre) refleja esta mayor confianza funcional en la capacidad del gobierno para asegurar estabilidad externa y acceso a mercados, aunque el apoyo sigue siendo instrumental y condicionado, sin traducirse en una adhesión política estructural al proyecto del PT.

CENTRALES SINDICALES, AGREMIACIONES

A lo largo del segundo semestre de 2025, las centrales sindicales mantuvieron un respaldo político general al gobierno de Lula, valorando su compromiso histórico con los derechos laborales, la agenda social y su liderazgo en foros internacionales. La leve corrección de la calificación (de 3.65 en abril a 3.62 en diciembre) responde a un apoyo más condicionado, marcado por expectativas parcialmente insatisfechas en materia salarial y laboral y por un acompañamiento crítico ante las restricciones fiscales y políticas que enfrenta el Ejecutivo.

FUERZAS ARMADAS

Durante el segundo semestre de 2025 se registró un deterioro moderado en la relación entre el gobierno de Lula y las Fuerzas Armadas, marcado por fallos judiciales que expusieron la implicación de altos mandos en el intento golpista de 2022 y reactivaron tensiones latentes sobre lealtad institucional y doctrina democrática. La actualización de la calificación (de 3.60 en abril a 3.40 en diciembre) refleja una relación más controlada que cooperativa, con subordinación formal garantizada pero menor confianza política y estratégica entre el Ejecutivo y la institución militar.

POLICÍA

En la segunda mitad de 2025 el respaldo de las fuerzas policiales al gobierno de Lula mostró una consolidación funcional, impulsada por la priorización de la seguridad pública, la aprobación de normas más duras contra el crimen organizado y la legitimación social significativa de operativos de alta intensidad. La actualización de la calificación (de 3.40 en abril a 3.60 en diciembre) refleja este mayor alineamiento operativo con las prioridades gubernamentales, aunque se ve modulada por tensiones éticas y debates públicos sobre la proporcionalidad de las intervenciones y la interacción con derechos humanos y controles jurídicos institucionales.

IGLESIA

Durante el segundo semestre de 2025 se registró una mejora limitada en la relación entre el gobierno de Lula y la Iglesia, reflejada en la reactivación del diálogo institucional a nivel internacional y en gestos diplomáticos hacia el Vaticano. La actualización de la calificación (de 1.69 en abril a 1.90 en diciembre) responde a esta recomposición simbólica y a la adopción de un enfoque más pragmático y plural en materia religiosa, aunque persisten diferencias estructurales y una pérdida relativa de centralidad de la Iglesia Católica en el escenario político brasileño.

MINORIAS ACTIVAS

Si bien el gobierno de Lula mantiene un marco institucional y discursivo favorable a las agendas indígenas, ambientales y de diversidad, durante el segundo semestre de 2025 emergieron tensiones visibles vinculadas a la participación efectiva de estos actores y al manejo de la protesta social. La actualización de la calificación (de 3.70 en abril a 3.40 en diciembre) responde al paso de un apoyo mayoritariamente entusiasta a un respaldo crítico y condicional, caracterizado por coincidencias estratégicas de fondo, pero crecientes fricciones en la implementación y en los mecanismos de diálogo.

PODER LEGISLATIVO

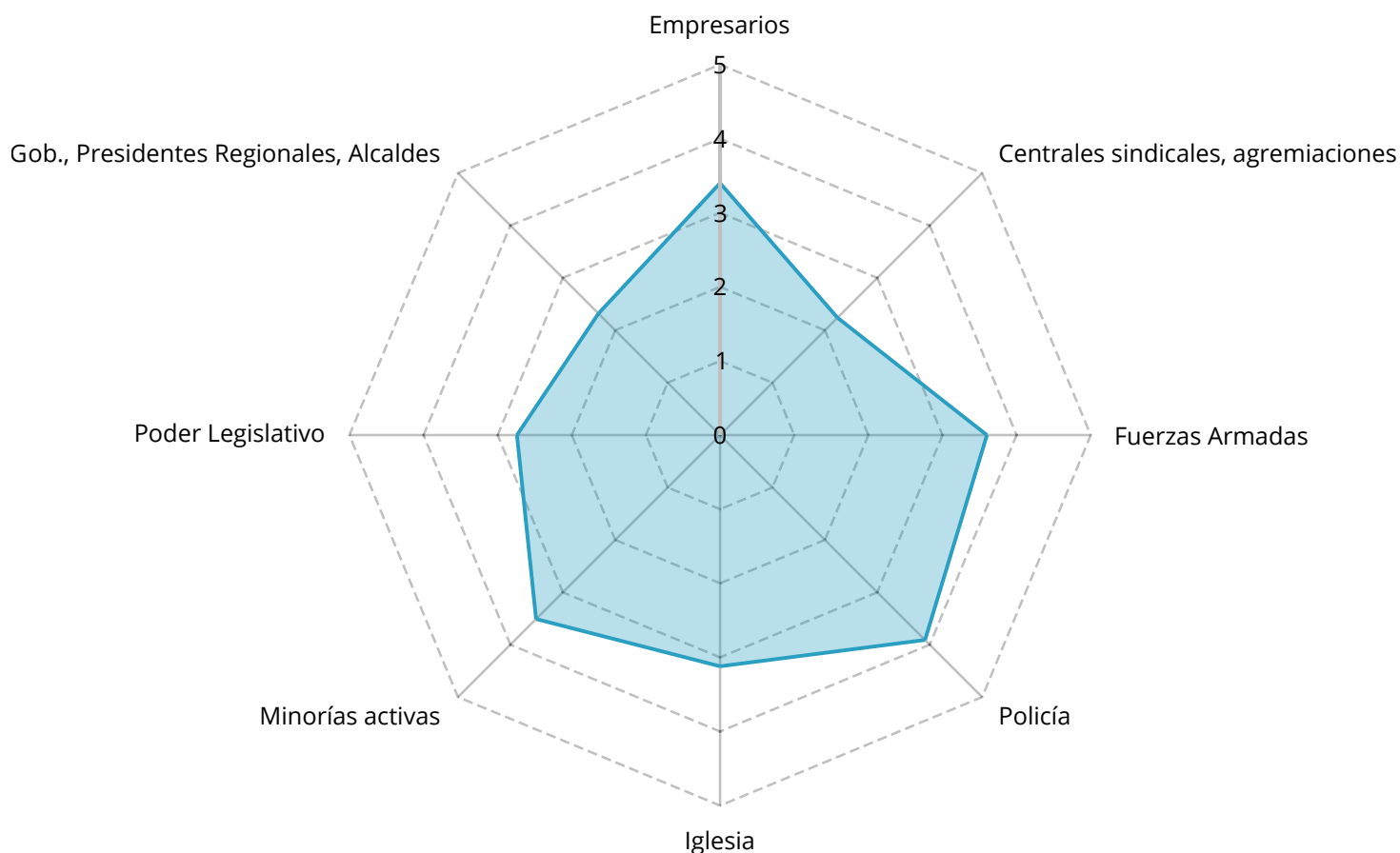
Durante el segundo semestre de 2025 se profundizó la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, que pasó de una cooperación selectiva a una dinámica abiertamente confrontativa en temas fiscales, institucionales y de memoria democrática. La actualización de la calificación (de 2.0 en abril a 1.73 en diciembre) refleja el debilitamiento de la capacidad del gobierno para ordenar mayorías legislativas, la fragmentación de su base parlamentaria y el uso recurrente del veto presidencial como mecanismo defensivo frente a una agenda legislativa cada vez más autónoma y desafiante.

GOBERNADORES, PRESIDENTES REGIONALES, ALCALDES

Durante el segundo semestre de 2025 se consolidó una mayor autonomización política de los liderazgos subnacionales, especialmente en materia de seguridad pública, donde varios gobernadores impulsaron mecanismos de coordinación propios al margen del Ejecutivo federal. La actualización de la calificación (de 2.0 en abril a 1.80 en diciembre) refleja la pérdida relativa de centralidad del gobierno nacional en la conducción territorial y el pasaje hacia una dinámica más competitiva y preelectoral entre el presidente y los mandatarios regionales, aunque sin ruptura institucional ni bloqueo fiscal generalizado.

CHILE

Niveles de legitimidad por Actor - Chile



EMPRESARIOS

Durante el segundo semestre de 2025 la relación entre el gobierno de Gabriel Boric y el sector empresarial mostró una estabilidad ambivalente: mientras se reforzó el discurso pro-inversión y la búsqueda activa de capital extranjero en foros internacionales, persistieron tensiones con el empresariado local, reflejadas en la continuidad de la fuga de capitales y en episodios de confrontación retórica. La actualización de la calificación (de 3.36 en abril a 3.40 en diciembre) responde a una leve mejora en la señalización externa y comercial, compensada por una confianza interna aún limitada y condicionada.

CENTRALES SINDICALES, AGREMIACIONES

Durante el segundo semestre de 2025 se mantuvo el diálogo institucional entre el gobierno y las organizaciones sindicales, pero se intensificaron las tensiones derivadas de demandas estructurales insatisfechas y del rechazo explícito a iniciativas del Ejecutivo en materia de seguridad social y relaciones laborales. La actualización de la calificación (de 2.40 en abril a 2.24 en diciembre) refleja el pasaje desde un apoyo crítico moderado hacia una relación más confrontativa, caracterizada por afinidad política de base, pero creciente presión pública y menor alineamiento programático.

FUERZAS ARMADAS

Durante el segundo semestre de 2025 se registró un fortalecimiento de la relación institucional entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, reflejado en la ampliación de su rol en materias de seguridad fronteriza, la actualización integrada de la Política de Defensa y la Política Militar, y una mayor previsibilidad estratégica de largo plazo. La actualización de la calificación (de 3.35 en abril a 3.60 en diciembre) responde a este mayor alineamiento funcional y al reconocimiento explícito del valor institucional de las FF.AA., aun dentro de un marco de control civil y sin convergencia ideológica plena.

POLICÍA

Durante el segundo semestre de 2025 se consolidó un fortalecimiento del respaldo policial al gobierno, reflejado en la ampliación de competencias legales, el aumento del presupuesto de seguridad, la continuidad de operativos conjuntos de alcance nacional y el respaldo político explícito del Presidente a la labor de Carabineros y la PDI. La actualización de la calificación (de 3.59 en abril a 3.91 en diciembre) responde a este mayor alineamiento político-operativo y a una señal clara de priorización institucional de la seguridad pública, aunque su sostenibilidad dependerá de resultados consistentes en seguridad ciudadana.

IGLESIA

Durante el segundo semestre de 2025 se fortaleció el vínculo institucional entre el gobierno y la Iglesia, reflejado en audiencias oficiales del Presidente con el Papa, una agenda compartida en materias sociales y de derechos humanos, y la mantención de canales de cooperación estables. La actualización de la calificación (de 2.80 en abril a 3.12 en diciembre) responde a esta mayor consistencia del diálogo y a un clima de respeto mutuo, aun cuando persisten diferencias en temas valóricos y el gobierno mantiene un enfoque explícitamente plural y laico.

MINORIAS ACTIVAS

Durante el segundo semestre de 2025 el respaldo de las minorías activas al gobierno se mantuvo elevado, pero experimentó un desgaste visible, especialmente en el vínculo con organizaciones indígenas, donde la persistencia de la militarización y el estado de excepción contrastó con las expectativas de cambio estructural. La actualización de la calificación (de 3.81 en abril a 3.51 en diciembre) refleja el pasaje desde un apoyo ampliamente entusiasta hacia un respaldo más fragmentado y crítico, sostenido por avances simbólicos e institucionales, pero tensionado por déficits en la implementación y señales contradictorias en la agenda identitaria.

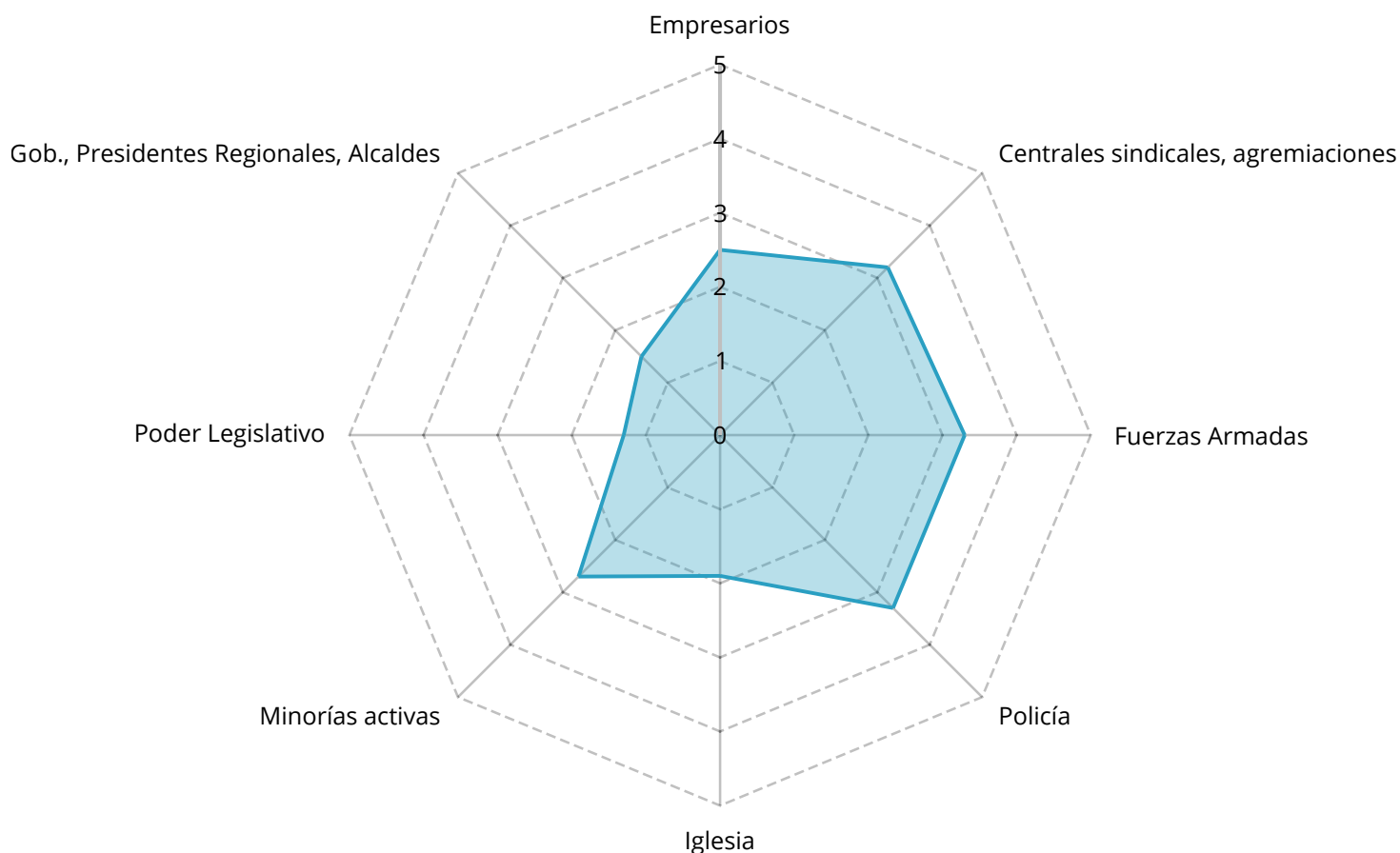
PODER LEGISLATIVO

Durante el segundo semestre de 2025 la relación entre el Ejecutivo y el Congreso mostró una mejora funcional asociada al cierre ordenado del ciclo legislativo, reflejada en la aprobación del Presupuesto 2026 y de proyectos clave mediante acuerdos transversales. La actualización de la calificación (de 2.55 en abril a 2.74 en diciembre) responde a esta mayor cooperación pragmática en el tramo final del gobierno de Gabriel Boric, aunque persisten la fragmentación política y la ausencia de una mayoría estable que limitan la capacidad reformista estructural.

GOBERNADORES, PRESIDENTES REGIONALES, ALCALDES

Durante el segundo semestre de 2025 se fortalecieron los canales de coordinación entre el Ejecutivo y las autoridades subnacionales, con mayor presencia territorial del Presidente, audiencias formales con el municipalismo y avances en infraestructura y desarrollo regional. La actualización de la calificación (de 2.0 en abril a 2.32 en diciembre) refleja esta mejora operativa; sin embargo, el apoyo permanece condicionado por la presión creciente de alcaldes—incluidos oficialistas— ante la inseguridad y por una relación heterogénea que varía según territorio y signo político.

Niveles de legitimidad por Actor - Colombia



EMPRESARIOS

Durante el segundo semestre de 2025 se profundizó el deterioro de la relación entre el gobierno y el sector empresarial, marcado por el fracaso de la concertación del salario mínimo, su definición por decreto presidencial y una retórica crecientemente confrontativa hacia los gremios económicos. La actualización de la calificación (de 2.93 en abril a 2.52 en diciembre) refleja la pérdida de confianza estructural, el debilitamiento del diálogo tripartito y el aumento de la incertidumbre regulatoria, factores que condicionan la inversión y limitan el respaldo empresarial al Ejecutivo.

CENTRALES SINDICALES Y AGEMIACIONES

Durante 2025 se consolidó el respaldo de las principales centrales sindicales al gobierno de Gustavo Petro, reflejado en una movilización sostenida a favor de la reforma laboral, la consulta popular y el aumento del salario mínimo definido por el Ejecutivo. La mejora en la calificación (de 2.80 en abril a 3.15 en diciembre) responde a la percepción sindical de coherencia política y priorización de la agenda laboral, aunque el apoyo continúa apoyándose más en la acción callejera que en logros institucionales definitivos.

FUERZAS ARMADAS

Durante el segundo semestre de 2025, la relación entre el gobierno de Gustavo Petro y las Fuerzas Armadas mostró una leve mejora en términos de control civil y alineamiento institucional, reflejada en los recientes cambios en la cúpula militar orientados a garantizar seguridad y estabilidad democrática de cara a 2026. No obstante, persisten focos de tensión vinculados a la política de “paz total”, episodios operativos sensibles y el ruido geopolítico generado por Venezuela y Estados Unidos. El aumento marginal de la calificación (de 3.15 en abril a 3.25 en agosto) responde a una mayor subordinación institucional, aunque sin traducirse aún en un respaldo estratégico pleno.

POLICÍA

Durante el segundo semestre 2025, la relación entre el gobierno de Gustavo Petro y la Policía Nacional se mantuvo institucionalmente funcional, con reiteradas expresiones de respaldo político y reconocimiento al sacrificio de los uniformados. Sin embargo, el recrudecimiento de la violencia contra la fuerza pública, las fallas en el esquema de seguridad presidencial y los cambios en la cúpula policial en un contexto de crisis operativa generaron tensiones internas y desgaste institucional. La leve corrección a la baja del puntaje (de 3.40 en abril a 3.30 en diciembre) refleja un apoyo político presente, pero condicionado por un entorno de alta conflictividad y exigencias crecientes de eficacia.

IGLESIA

La calificación del apoyo de la Iglesia Católica al gobierno de Gustavo Petro se incrementa (de 1.50 en abril a 1.90 en diciembre), reflejando una mejora relativa en la relación institucional. Este ajuste responde principalmente al rol activo de la Iglesia como mediadora política en un contexto de alta polarización, al lograr sentar en una misma mesa al Ejecutivo, al Congreso y a las demás ramas del poder, promoviendo compromisos explícitos de desescalamiento del lenguaje político y rechazo de la violencia. Asimismo, la normalización del vínculo diplomático con el Vaticano contribuyó a recomponer los canales de diálogo. No obstante, el aumento es moderado y no implica un alineamiento político con el gobierno. Persisten tensiones estructurales en torno a reformas sociales, laborales y fiscales —incluida la discusión sobre la tributación de las iglesias— así como diferencias doctrinarias profundas y episodios de confrontación discursiva.

MINORIAS ACTIVAS

En este segundo semestre se experimenta una leve disminución (de 3.05 en abril a 2.70 en diciembre). La calificación del apoyo de las minorías activas al gobierno se ajusta a la baja, reflejando una transición desde un respaldo mayormente favorable hacia una relación crecientemente crítica y fragmentada. Si bien persiste la afinidad ideológica con el proyecto progresista del Ejecutivo y se mantienen abiertos los canales de diálogo institucional, distintos colectivos —en particular comunidades indígenas, organizaciones afrodescendientes, movimientos feministas y sectores LGBTIQ+— han intensificado sus reclamos por la lentitud en la implementación de reformas, la brecha entre el discurso inclusivo y los resultados concretos, y la persistencia de violencia en los territorios. Durante el segundo semestre del año se registraron movilizaciones, comunicados y cuestionamientos públicos que evidencian una

pérdida de capacidad de movilización pro-gobierno y un pasaje desde el apoyo activo hacia una lógica de presión reivindicativa.

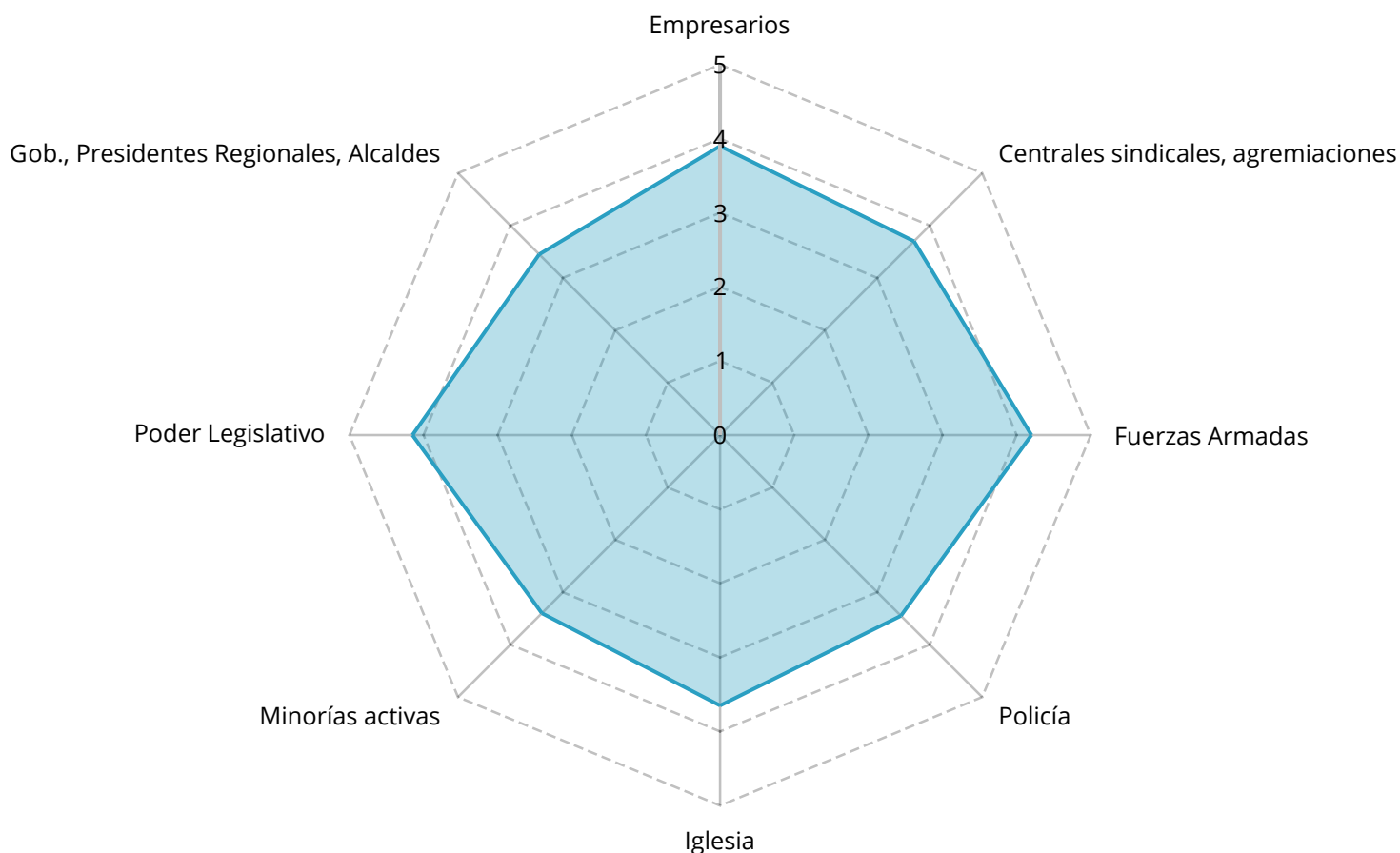
PODER LEGISLATIVO

El Congreso cierra un semestre de derrotas para Petro, el Legislativo hundió la reforma a la salud y la tributaria, principales apuestas del presidente, y dejó en vilo la ley de jurisdicción agraria y el proyecto que mantiene con vida el Ministerio de la Igualdad. La calificación del apoyo del Poder Legislativo al gobierno de Gustavo Petro se reduce de manera significativa (de 1.85 en abril a 1.30 en diciembre), reflejando un deterioro marcado de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. El Legislativo profundizó una dinámica de confrontación que llevó al presidente a escalar el conflicto institucional mediante la amenaza de una Asamblea Constituyente y el uso de la emergencia económica para adoptar medidas sin aval parlamentario. Este escenario consolidó un clima de desconfianza mutua y choque abierto entre poderes, con acusaciones cruzadas, control político intensificado y una creciente polarización. La pérdida de capacidad del Ejecutivo para articular mayorías legislativas estables, sumada a la judicialización y politización del debate constitucional, explica el fuerte ajuste a la baja de la calificación. El respaldo del Congreso al gobierno es hoy bajo, fragmentado y predominantemente adversarial, limitándose a apoyos puntuales y tácticos sin constituir una base mínima de gobernabilidad legislativa.

GOBERNADORES, PRESIDENTES REGIONALES, ALCALDES

La calificación del apoyo de las autoridades subnacionales al gobierno de Gustavo Petro se reduce (de 1.89 en abril a 1.50 en diciembre), reflejando un deterioro progresivo de la relación política y territorial. Si bien se mantuvieron canales institucionales de coordinación y cooperación puntual en programas sociales y administrativos, durante el segundo semestre se profundizaron las tensiones con gobernadores y alcaldes —incluidos mandatarios de grandes ciudades— en torno a la seguridad, el control del orden público y la implementación de la estrategia de “Paz Total”. La persistencia de la violencia en los territorios, las críticas a la centralización de decisiones, el rechazo a lineamientos simbólicos como los días cívicos y la preocupación generada por la declaratoria de emergencia económica y el impulso a una Asamblea Constituyente reforzaron una dinámica defensiva por parte de los líderes regionales.

Niveles de legitimidad por Actor - Chile



EMPRESARIOS

La calificación del apoyo del sector empresarial al gobierno de Claudia Sheinbaum se incrementa de manera significativa (de 3.51 en abril a 3.90 en diciembre), reflejando un fortalecimiento sostenido de la relación entre el Ejecutivo y los principales actores económicos del país. Durante el segundo semestre del año, la Presidenta consolidó un esquema de diálogo estructurado con el empresariado a través del Plan México, la creación de un consejo empresarial para la promoción de inversiones y múltiples reuniones de alto nivel con referentes clave —incluidos líderes del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo Mexicano de Negocios y grandes grupos industriales y financieros— orientadas a infraestructura, nearshoring y diversificación comercial. Este acercamiento fue acompañado por el respaldo explícito del sector privado a iniciativas estratégicas del gobierno, como la reforma aduanera y la preparación para la revisión del T-MEC, así como por el compromiso de avanzar en decenas de proyectos de inversión. Si bien persisten tensiones puntuales —en particular en materia fiscal y de estímulos regionales—, estas no han erosionado el clima general de cooperación.

CENTRALES SINDICALES, AGREMIACIONES

La calificación del apoyo de las centrales sindicales y organizaciones gremiales al gobierno de Claudia Sheinbaum registra una leve corrección a la baja (de 3.90 en abril a 3.70 en

diciembre). Durante el período, las principales centrales obreras mantuvieron un respaldo mayoritariamente favorable al Ejecutivo y al Plan México, valorando su énfasis en la soberanía económica, el fortalecimiento del mercado interno y la protección del empleo en un contexto internacional incierto. No obstante, este apoyo se vio parcialmente erosionado por conflictos sectoriales específicos, en particular con segmentos del empleo público, que protagonizaron paros y movilizaciones en rechazo a propuestas vinculadas a jubilaciones, pensiones y reformas administrativas. Estas tensiones no derivaron en una ruptura con el gobierno, pero sí evidenciaron un pasaje desde un respaldo pleno hacia una relación más negociada y reivindicativa.

FUERZAS ARMADAS

La calificación del apoyo de las Fuerzas Armadas al gobierno de Claudia Sheinbaum se incrementa levemente (de 4.10 en abril a 4.20 en diciembre), reflejando la consolidación de una relación institucional sólida y estable. Durante el período, la Presidenta mantuvo un vínculo fluido con el estamento militar, reafirmando públicamente su rol central en la seguridad, la soberanía nacional y la atención de emergencias, así como respaldando su participación en tareas estratégicas como la operación de puertos, aduanas y planes de protección civil (DN-III-E). Asimismo, el Ejecutivo sostuvo una postura firme de defensa de la soberanía frente a presiones externas, al tiempo que encauzó la cooperación militar con Estados Unidos a través de mecanismos formales y acotados —como programas de entrenamiento autorizados por el Senado—, lo que fue bien recibido por la cúpula castrense. Aunque se registraron episodios sensibles, como investigaciones por uso indebido de la fuerza, estos fueron abordados institucionalmente por el gobierno sin erosionar la cadena de mando ni la lealtad militar.

POLICÍA

El apoyo de las instituciones policiales al gobierno de Claudia Sheinbaum registra una leve disminución (de 3.55 en abril a 3.45 en diciembre), aunque se mantiene en un rango medio–alto. Durante el período, el Ejecutivo profundizó la reestructuración del sistema de seguridad pública, impulsando una estrategia basada en inteligencia, fortalecimiento de mandos profesionales y coordinación federal-estatal, incluyendo el relanzamiento de una suerte de “Policía Federal 2.0” bajo el liderazgo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estas definiciones estratégicas han sido bien recibidas por amplios sectores de la jerarquía policial. Sin embargo, el contexto operativo ha sido especialmente exigente. El aumento de enfrentamientos en protestas sociales, los altos niveles de violencia criminal —con un número significativo de policías heridos y asesinados— y episodios de uso indebido de la fuerza, como la incursión de policías mexicanos en territorio guatemalteco, introdujeron tensiones internas. La decisión presidencial de ordenar investigaciones y sanciones en estos casos, si bien refuerza el control civil y la legalidad, generó malestar en algunos sectores policiales expuestos a condiciones de alto riesgo.

IGLESIA

La presidenta Sheinbaum ha mantenido una relación cercana con la Iglesia Católica, participando en eventos conjuntos como el lanzamiento de un plan de desarme. La relación entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la Iglesia Católica ha mostrado una

evolución positiva (de 3.45 en abril a 3.65 en diciembre), pasando de una cercanía prudente a una colaboración más estructurada y visible, especialmente en materia de paz, desarme y cohesión social. Se han consolidado canales de diálogo directo entre el Ejecutivo y la jerarquía eclesiástica, destacando el trabajo conjunto en el plan de desarme voluntario, ampliamente valorado por los obispos como una “siembra de paz”. La reiterada comunicación con el papa León XIV, incluida una llamada telefónica y la expectativa de una visita papal en 2026, ha reforzado simbólicamente la legitimidad internacional y moral del gobierno en este ámbito. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha emitido un balance público que combina reconocimiento y advertencia: valora avances en seguridad, diplomacia y reducción de la violencia, pero mantiene una postura crítica frente a la corrupción persistente, el bajo crecimiento económico y ciertas reformas institucionales, en particular la judicial y la electoral.

MINORIAS ACTIVAS

La calificación del apoyo de las minorías activas al gobierno de Claudia Sheinbaum muestra una leve corrección a la baja (de 3.60 en abril a 3.40 en diciembre), reflejando una relación estable, pero con críticas persistentes desde sectores organizados. El Ejecutivo ha promovido iniciativas simbólicas e institucionales de inclusión —como declarar 2025 como Año de la Mujer Indígena y convocar colectivas feministas a participar en movilizaciones pacíficas— que han generado diálogo político visible con mujeres, indígenas y movimientos de género. Al mismo tiempo, agrupaciones LGBT+ y colectivos por derechos humanos han continuado sus movilizaciones y protestas por desapariciones, crímenes de odio y falta de implementación efectiva de avances legislativos, evidenciando frustraciones en el cumplimiento de derechos concretos. Asimismo, manifestaciones más amplias impulsadas por jóvenes y sectores críticos por inseguridad y corrupción han incorporado demandas de minorías activas en sus plataformas.

PODER LEGISLATIVO

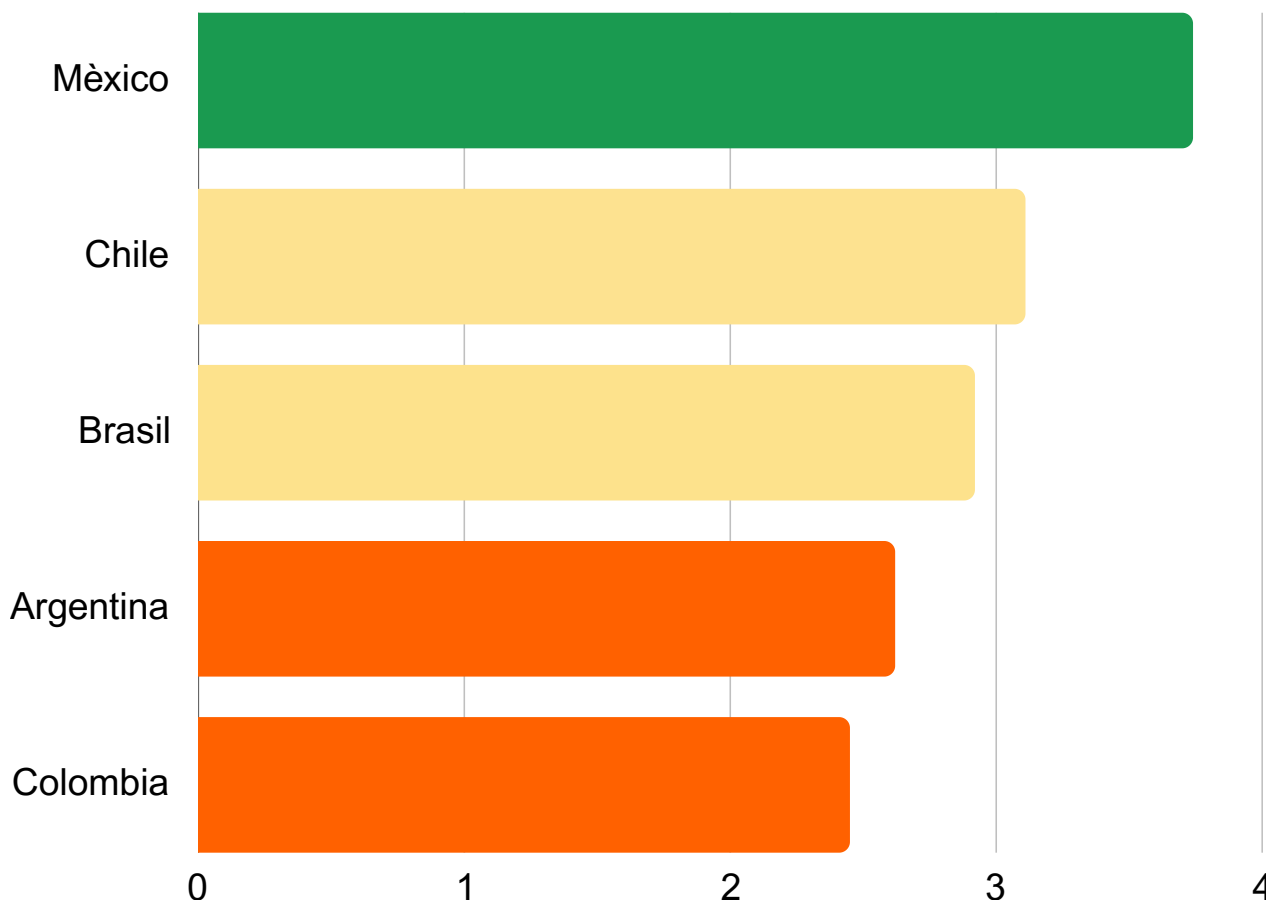
La calificación del apoyo del Poder Legislativo al gobierno de Claudia Sheinbaum aumenta moderadamente (de 3.95 en abril a 4.15 en diciembre), reflejando un vínculo funcional y cooperativo, potenciado por las mayorías parlamentarias de Morena, PT y PVEM que han respaldado consistentemente la agenda del Ejecutivo. Durante el año, el Congreso aprobó reformas legislativas y constitucionales propuestas por el Gobierno, como la modificación a la Ley del Amparo y una norma que amplía las facultades de la Marina, lo que demuestra la capacidad de transformar la visión gubernamental en normas vigentes. Asimismo, la presentación de múltiples iniciativas por parte de la Presidencia y la activación de comisiones legislativas para examinar propuestas de desarrollo tecnológico y derechos legales muestran un Legislativo activo y receptivo. Aunque en algunos casos —como la discusión sobre ajustes arancelarios a productos de China o la presión social derivada de movilizaciones amplias— el Congreso ha modulado sus decisiones y se han dado debates más largos, estas dinámicas reflejan una relación estructuralmente sólida y mayoritaria, con capacidad de negociación y adaptación a contextos complejos.

GOBERNADORES, PRESIDENTES REGIONALES, ALCALDES

La calificación del apoyo de los líderes subnacionales al gobierno de Claudia Sheinbaum muestra una mejora significativa (de 3.05 en abril a 3.45 en diciembre), reflejando una relación institucional más cooperativa y diversa en matices políticos. Durante el año, la presidenta promovió encuentros amplios con gobernadores y alcaldes de todo el país —incluido el Encuentro Nacional Municipal— para destinar recursos federales al desarrollo de infraestructura, servicios básicos y obras sociales, lo que fortaleció canales de coordinación operativa con actores de distintos partidos. Además, la cooperación frente a emergencias como los aluviones de octubre de 2025 y la articulación de políticas conjuntas en materia de agua, servicios y programas sociales mostraron capacidad de trabajo intergubernamental más allá de la alineación partidaria. Aunque casos de violencia local, como el asesinato del alcalde de Uruapan, y tensiones derivadas de problemas de seguridad han introducido desafíos, la respuesta coordinada del gobierno federal y las autoridades estatales y municipales contribuyó a mantener una relación funcional. También se observa apoyo público de algunas autoridades locales a políticas progresistas en temas sociales y migratorios, lo que ha favorecido un acercamiento político en determinados segmentos del municipalismo.

CONCLUSIÓN

Comparación de Legitimidad por País (Diciembre 2025)



Los resultados comparativos a diciembre confirman la persistencia de brechas estructurales en los niveles de legitimidad institucional entre los gobiernos de la región, aunque con matices relevantes respecto al escenario observado en abril. México se mantiene con claridad como el país con mayor respaldo agregado, consolidando su posición de liderazgo regional. El gobierno de Claudia Sheinbaum combina una relación sólida con el empresariado, una amplia mayoría legislativa, un alineamiento funcional con gobernadores y alcaldes, y un vínculo estable con las Fuerzas Armadas y la Iglesia. A diferencia de abril, ya no se trata únicamente de expectativas asociadas al inicio de mandato, sino de una legitimidad en proceso de consolidación operativa, lo que refuerza su capacidad para sostener políticas públicas y administrar tensiones sin erosionar su base institucional.

En un segundo escalón continúan ubicándose Chile y Brasil, ambos con niveles intermedios de legitimidad, pero con trayectorias diferenciadas. En el caso chileno, el gobierno de Gabriel Boric muestra una leve mejora relativa respecto de abril, explicada por una mayor cooperación con actores institucionales —en particular Fuerzas Armadas, policías y gobiernos subnacionales—, aunque persisten tensiones con el empresariado y con segmentos de las minorías activas. La legitimidad del gobierno sigue siendo funcional pero acotada, sostenida más por la estabilidad institucional que por consensos políticos amplios, especialmente en la fase final del mandato.

Brasil, por su parte, mantiene un nivel similar al de Chile, aunque con una dinámica más inestable. El presidente Lula conserva apoyos relevantes en sectores sindicales y empresariales, y una relación institucional controlada con las Fuerzas Armadas, pero enfrenta un deterioro en su vínculo con el Congreso y con gobernadores, en un contexto de judicialización del pasado reciente y tensiones crecientes en materia de seguridad. Esto configura una legitimidad heterogénea y fragmentada, suficiente para gobernar, pero dependiente de equilibrios delicados y negociaciones permanentes.

En el bloque inferior se mantienen Argentina y Colombia, con los niveles más bajos de legitimidad regional, aunque por razones distintas. En Argentina, el gobierno de Javier Milei continúa operando con una base institucional frágil, marcada por conflictos persistentes con gobernadores, sindicatos y parte del sistema político, compensados parcialmente por el respaldo de ciertos sectores empresariales y por el apoyo de las Fuerzas Armadas. La legitimidad sigue siendo asimétrica y volátil, típica de un proceso de transformación económica profunda en una sociedad altamente polarizada.

Colombia, en cambio, muestra un deterioro más claro respecto de abril. El gobierno de Gustavo Petro enfrenta un Congreso crecientemente hostil, tensiones con el empresariado, una relación ambivalente con las Fuerzas Armadas y una estrategia de confrontación institucional —consulta popular, emergencia económica, discurso constituyente— que, lejos de ampliar consensos, tiende a profundizar la segmentación del apoyo. Si bien mantiene respaldo en sectores sindicales y de minorías activas, la erosión del apoyo institucional incrementa los riesgos de ingobernabilidad y adelanta un escenario de alta conflictividad política de cara al ciclo electoral de 2026.



ANALISTA COORDINADOR
Hugo San Martin Arzabe

ANALISTAS COLABORADORES
Jaime Bravo
Armando Vargas

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Mayra Peñaloza Juárez



MedOr
Italian
Foundation